

Santiago de Cali, mayo de 2016.

Señores

JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO – Reparto -
Buga.

Ref.: Medio control	Reparación Directa
Demandante	Fabián Alberto Garay y otros
Demandado	Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

HENRY BRYON IBÁÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.588.459 de Cali y tarjeta profesional de Abogado No. 68.873 del Consejo Superior de la Judicatura y **FERNANDO YEPES GÓMEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.417.378 de Cali y Tarjeta Profesional de Abogado No. 102.358 del Consejo Superior de la Judicatura, como actuando como apoderados judiciales de **FABIÁN ALBERTO GARAY GRANADA, OLGA BEATRIZ GARAY GRANADA, RUBÉN DARÍO SANTIAGO GARAY, ÁLVARO DANIEL SANTIAGO GARAY, JAIR DE JESÚS GARAY GRANADA, HÉCTOR HERNANDO GARAY VANEGAS, SUSANA GRANADA y ANGELA MARÍA GARAY GRANADA**; de conformidad con los poderes conferidos, acudimos ante esta jurisdicción para impetrar demanda – Medio de control de Reparación Directa en contra de la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL**; para que por los medios previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con citación y audiencia de la parte demandada, del agente del Ministerio Público y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, se declare su responsabilidad administrativa por los perjuicios causados a los demandantes, como consecuencia de las lesiones físicas y perturbaciones psicológicas sufridas por el joven Fabián Alberto Garay Granada, estando vinculado a la entidad demandada.

DESIGNACIÓN DE LAS PARTES

1. PARTE DEMANDANTE. Está compuesta por:

- 1.1. **FABIÁN ALBERTO GARAY GRANADA**, lesionado, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.006.317.258 de Bolívar (Valle).
- 1.2. **OLGA BEATRIZ GARAY GRANADA**, madre del lesionado, titular de la cédula de ciudadanía No. 29.187.684 de Bolívar (Valle).
- 1.3. **RUBÉN DARÍO SANTIAGO GARAY**, hermano del afectado, identificado con la tarjeta de identidad No. 1.193.047.535, menor de edad, nacido el día trece (13) del mes de julio del año dos mil uno (2001).
- 1.4. **ÁLVARO DANIEL SANTIAGO GARAY**, hermano de la víctima, identificado con la tarjeta de identidad No. 1.113.781.242, menor de edad, nacido el día trece (13) del mes de julio del año dos mil uno (2001).
- 1.5. **JAIR DE JESÚS GARAY GRANADA**, hermano del lesionado, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.006.317.528 de Bolívar (Valle).
- 1.6. **HECTOR HERNANDO GARAY VANEGAS**, abuelo materno de la víctima, titular de la cédula de ciudadanía No. 2.483.108 de Bolívar (Valle).
- 1.7. **SUSANA GRANADA**, abuela materna del afectado, portadora de la cédula de ciudadanía No. 29.188.131 de Bolívar (Valle).
- 1.8. **ÁNGELA MARÍA GARAY GRANADA**, tía por línea materna del lesionado, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.187.949 de Bolívar (Valle)

Apoderados de la parte demandante. **HENRY BRYON IBÁÑEZ** titular de la cédula de ciudadanía No. 16.588.459 de Cali y portador de la Tarjeta Profesional No. 68.873 proveída por el Consejo Superior de la Judicatura y **FERNANDO YEPES GÓMEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.417.378 de Cali y Tarjeta Profesional de Abogado No. 102.358 del Consejo Superior de la Judicatura.

2. **PARTE DEMANDADA.** Corresponde a la **NACIÓN – MINISTERIO DE LA DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL** – representado legalmente por el señor Ministro de Defensa Dr. Luís Carlos Villegas o por quien haga sus veces al momento de la notificación, funcionario con sede en Bogotá D.C.
3. **MINISTERIO PÚBLICO.** Representado por el señor Procurador Judicial delegado ante esta Jurisdicción.

PRETENSIONES

PRIMERA. Que se declare la responsabilidad administrativa de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por todos los perjuicios ocasionados a Fabián Alberto Garay Granada, Olga Beatriz Garay Granada, Rubén Darío Santiago Garay, Álvaro Daniel Santiago Garay, Jair de Jesús Garay Granada, Héctor Hernando Garay Granada, Susana Granada y Ángela María Garay Granada; como consecuencia de las lesiones físicas y perturbaciones psicológicas, padecidas por el joven Fabián Alberto Garay Granada, en hechos ocurridos durante la prestación de su servicio militar en la institución demandada.

SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la entidad demandada a realizar las siguientes reparaciones:

1. PERJUICIOS MATERIALES.

1.1. **Lucro Cesante.** Su fundamento en el caso bajo examen se encuentra en la pérdida de capacidad laboral del joven Garay Granada, como consecuencia de las lesiones físicas y perturbaciones psicológicas causadas en el suceso que da origen a esta reclamación.

Con formato: Fuente: Century Gothic, Español (España)

Con formato: Fuente: Century Gothic, Español (España)

Con formato: Fuente: Century Gothic, Español (España)

Para la liquidación de este perjuicio se tendrá en cuenta:

- a. Porcentaje de la pérdida de capacidad laboral¹, que podrá estar oscilando en un treinta por ciento (30%), según las características de las afectaciones físicas y psicológicas sufridas por Garay Granada.

¹ Determinada por la Junta Médica por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional.

- b. Ingresos promedio mensuales, es decir para los efectos el salario mínimo mensual vigente para la época de la terminación de su vinculación a la institución.
- c. Período de vida probable del afectado, es decir con cincuenta y tres (53) años de expectativa de vida laboral, de conformidad con el documento de Proyecciones de Población expedido por el Departamento Nacional de Estadística de septiembre de 2007².
- a. Intereses compensatorios desde la fecha de su causación hasta cuando se produzca la indemnización.

La suma arrojada será actualizada, conforme la siguiente fórmula:

$$VP = S \frac{\text{Índice Final}}{\text{Índice Inicial}}$$

Donde los factores equivalen a:

VP	Valor Presente
S	Suma que se busca actualizar
Índice final	Índice de Precios al Consumidor a la fecha del incidente regulador.
Índice Inicial	Índice de Precios al Consumidor a la fecha de causación del perjuicio.

La indemnización comprenderá dos períodos:

- a. **Vencido o consolidado**, que se establezca aplicando la fórmula:

$$S = \frac{Ra (1+i)^n - 1}{i}$$

Ra	Renta mensual actualizada según la primera fórmula,
i	Interés puro o técnico del 6 % mensual o 0.4867 mensual
n	Período (número de meses) que comprende la indemnización, que va desde la fecha de ocurrencia del hecho, hasta aquella probable de ejecutoria del auto.

² La esperanza de vida al nacer para hombres es de setenta y dos punto ún (72.1) años.

b. Futuro o anticipado, que se halla mediante la fórmula:

$$S = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$

S	Suma buscada
Ra	Renta actualizada
i	Interés 6%
n	Número de meses a indemnizar (supervivencia).

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

De acuerdo con los factores mencionados inicialmente; podría tasarse aproximadamente este perjuicio en la suma de ciento cincuenta millones de pesos (\$150.000.000.00) m/cte., o lo que resulte probado.

1.2. **Daño emergente.** Con motivo de las graves lesiones sufridas por Fabián Alberto Garay Granada se ha hecho necesario asumir los gastos de ciertos medicamentos y tratamientos para la recuperación de su situación física y psicológica, suma que ascienden a diez millones de pesos (\$10.000.000.00), según documentos que se anexarán.

En forma subsidiaria solicitamos al señor Juez de Conocimiento ordenar a la entidad el pago de este estipendio conforme la cuantía que se sirva determinar atendiendo los principios de equidad y de reparación integral así como las pautas fijadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corporación Internacional que ha entendido bajo ciertas circunstancias³, que este perjuicio puede presumirse, y que no obstante no lograr probarse, la equidad surge como criterio para su estimación⁴.

³. Ver entre otras, Caso Niños de la Calle vs Guatemala, sentencia del 26 de mayo de 2001, núm. 79; Caso de la "Panel Blanca" vs Guatemala, 25 de mayo de 2001 núm. 116; Caso "El Caracazo vs. Venezuela", sentencia de 29 de agosto de 2002, núm. 50.

⁴. La jurisprudencia de la alta corporación de lo contencioso administrativo ha expuesto la necesidad de reparar integralmente a la víctima del daño causado por las entidades públicas, que obedece no sólo a la materialización del principio de "reparación integral" que nuestro ordenamiento ha incorporado, sino en respuesta a la influencia de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias al denominado "Bloque de constitucionalidad".

Es lógico además entender que en virtud de la figura los jueces están sujetos a tener presente los instrumentos internacionales que se incorporan en nuestro compendio normativo, tal como puede interpretarse del contenido del artículo 93 constitucional. De allí que la jurisprudencia de los intérpretes autorizados de los instrumentos que hacen parte del bloque de constitucionalidad resultan efectivos al momento de dilucidar el alcance de los derechos humanos y del propio Derecho internacional humanitario, y las maneras de su reparación.

Reiteramos, la regulación de la responsabilidad patrimonial en el ordenamiento jurídico patrio, consagra el postulado del resarcimiento íntegro de los perjuicios inferidos a otra persona. Así, el artículo 16 de la ley 446 de 1998 prevé que *"Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales"*.

En dicho sentido ha explicado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil⁵

"[E]l juez tendrá que ordenar al demandado la restitutio in integrum a favor del damnificado, es decir que deberá poner al sujeto perjudicado en una situación lo más parecida posible a aquella en la que se encontraría de no haber ocurrido el daño. Por ello, una vez establecidos los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, el sentenciador tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto, esto es que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas en que tuvo lugar el daño, su intensidad, si se trata de daños irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio"

Con formato: Fuente: 10 pto, Español (España)

Y si bien es cierto, "...de conformidad con el principio de la necesidad de la prueba (art. 174 del C. de P. Civil), toda decisión judicial debe fundarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, el reconocimiento judicial de una pretensión que tenga como objeto la indemnización de un perjuicio, supone la demostración de todos y cada uno de los elementos que configuran la tutela jurídica de dicha pretensión, incluyendo, por supuesto, el daño, salvo aquellos eventos de presunción de culpa, de conformidad con la doctrina de la Corte, y la presunción de daños de acuerdo con la ley, como en los casos de los artículos 1599 y 1617 num. 2 del C. Civil. Sin embargo, una es la prueba del daño, o sea la de la lesión o menoscabo del interés jurídicamente tutelado, y otra, la prueba de su intensidad, del quantum del perjuicio. De ahí que la doctrina haga alusión al contenido patrimonial del daño para referirse a su intensidad, es decir, a su valor en moneda legal (dinero), como patrón de referencia para determinar la mensura, por cuanto considera que dada su simplicidad y universalidad, es el que más conviene al tráfico de las reparaciones, caso en el cual opera una reparación por equivalencia o propiamente indemnizatoria, por oposición a la reparación natural que implica 'volver las cosas al estado que tendrían si no hubiera ocurrido el hecho dañoso'⁶

Así como lo ha insistido la máxima Corporación de la jurisdicción ordinaria civil⁷:

//Es posible acudir a la equidad para determinar el monto del daño, en aquellos casos límite, en que, habiéndose acreditado el perjuicio patrimonial, la determinación de su cuantía se toma extremadamente difícil, no obstante el cumplimiento de las cargas probatorias por la parte

⁵ Sentencia de diciembre 18 de 2012, radicación número 2004-00172-01.

⁶ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia de agosto 9 de 1999, radicación 4897.

⁷ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia de febrero de 2002, expediente 2002-01011-01.

demandante. Al respecto se ha expresado que '[c]on referencia específica al invocado principio de la equidad, vale la pena recordar, además, con apego a numerosos contenidos doctrinarios, jurisprudenciales y, por supuesto, normativos, que no obstante las consecuencias inherentes al ejercicio de la delicada carga probatoria atrás aludida, hay casos en que sería injusto no concretar el valor de la indemnización so pretexto de que a pesar de estar demostrada la existencia del daño, su cuantificación no ha sido posible, pues ante esta circunstancia, el juez, además de estar impelido a usar las facultades oficiosas que en materia probatoria ponen a su alcance las normas procesales, ha de acceder a criterios de equidad que le impiden soslayar los derechos de las víctimas' (Cas. Civ. 5 de octubre de 2004. Exp. 6975)''

2. PERJUICIOS INMATERIALES.

2.1. Perjuicios morales.

La tradicional concepción del daño moral se centra en el daño ocasionado al ámbito efectivo o sentimental de la persona, lo que trae como consecuencia, sufrimiento, dolor, perturbación espiritual⁸, situaciones, que como se demostrará; se evidenciaron tanto en el afectado como en sus padres, hermanos y abuelos.

Atendiendo los principios de *Reparación Integral y Equidad* que señala el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, la valoración del perjuicio moral se tendrá en salarios mínimos legales mensuales, por lo cual se tasará así:

- **FABIÁN ALBERTO GARAY GRANADA**, cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la providencia definitiva.
- **OLGA BEATRIZ GARAY GRANADA** noventa (90) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la providencia definitiva.
- **RUBÉN DARÍO SANTIAGO GARAY**, ~~noventa~~-ochenta (~~-80~~) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la providencia definitiva.
- **ÁLVARO DANIEL SANTIAGO GARAY**, ochenta (~~-80~~) ~~0~~-salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la providencia definitiva.
- **JAIR DE JESÚS GARAY GRANADA**, ochenta (~~-80~~) ~~0~~-salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la providencia definitiva.

⁸ FERNANDEZ SESSAREGO Carlos. El daño a la persona (Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 1995, págs. 71 y ss). Artículo compilado en el texto DEL DAÑO, José N. Duque Gómez. Editora Jurídica de Colombia. Primera Edición 2011.

- **HÉCTOR HERNANDO GARAY VANEGAS**, setenta (-70) 0 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la providencia definitiva.
- **SUSANA GRANADA**, setenta (-70) 0 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la providencia definitiva.
- **ÁNGELA MARÍA GARAY GRANADA**, sesenta (-60) 0 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la providencia definitiva.

2.2. Daño a la salud o fisiológico.

El Consejo de Estado en sentencia del día catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011), radicación número 05001-23-25-000-1994-00020-01(19031), actor: Antonio José Vigoya Giraldo y otros, adoptó una nueva tipología de los perjuicios inmateriales que durante años ha venido definiendo, acogiendo “el daño a la salud” como un nuevo concepto que además desplaza toda una clasificación que de los daños inmateriales diferentes al moral se construyó jurisprudencialmente durante años. Sostuvo la Corporación

//Entonces, como se aprecia, el daño a la salud gana claridad, exactitud y equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a cubrir no sólo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se conseguiría una sistematización del daño no patrimonial. En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones.

En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica. Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.” (Resaltado fuera de texto)

Bajo las consideraciones de las graves lesiones sufridas por el joven Fabián Alberto Garay Granada dentro del establecimiento educativo tenemos un desmedro en su salud que generó afectaciones psico-físicas que deberán ser reparadas por la institución demandada.

La tasación del presente perjuicio, se estima aproximadamente en cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

2.3. Daño del derecho a la recreación, al aprovechamiento del tiempo libre.

El objetivo de la reparación es fundamentalmente devolver las cosas a su estado primitivo, *in natura*; no obstante hay eventos que por su naturaleza impiden lograr ese tipo de reparación, de allí que surjan las indemnizaciones⁹ y las compensaciones¹⁰ como forma reparatoria. No obstante la reparación no puede traducirse en un beneficio para el perjudicado, es decir no puede ir más allá, o de percibir más de lo que perdiere como consecuencia del daño.

Si bien es cierto la jurisprudencia del Consejo de Estado ha realizado serios estudios que permitan estructurar una tipología adecuada de los daños inmateriales, construida sobre la base de los principios de reparación integral y el "no enriquecimiento sin causa", no ha sido del todo pacífica la discusión, aún más cuando el escenario ofrece un alto grado en la polémica pues *vr. gr.* la doctrina refiere multiplicidad de daños inmateriales; la evidente dualidad de conceptos en lo que atañe a la finalidad de la reparación, es decir si se indemniza el daño evento o la consecuencia del mismo. Sin embargo, encontramos que en el mismo sentido nuestro Consejo de Estado advierte, a pesar de categorizar los daños inmateriales en clases que no llamen a confusiones, el daño moral y daño a la salud; la viabilidad de encontrar otros daños inmateriales, atendiendo el interés y el derecho permeado por el evento antijurídico, aunque permitiéndolo únicamente en asuntos diferentes a las reclamaciones por lesiones psico-físicas. Sostuvo

*//Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) **cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de "daño corporal o afectación a la integridad psicofísica"** y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación//¹¹.*

⁹ Entendida como aquella "acción que se le otorga al acreedor o a la víctima para exigir de parte de su deudor o bien del causante de un daño **una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese reportado el cumplimiento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación** instaurada entre las partes o la reparación del mal causado a la víctima". Fuente Wikipedia.

¹⁰ De conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, puede significar: "Igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra, o "Dar algo o hacer un beneficio en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto que se ha causado"

¹¹ CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del día catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011), radicación número: 05001-23-25-000-1994-00020-01 (19031), actor: Antonio José Vigoya Giraldo y otros,

Sin embargo, a pesar de la posición de la Alta Corporación, debemos comprender que el daño a la salud, no obstante, envuelve el daño-evento y el daño-consecuencia, su capacidad reparatoria no abarca el menoscabo de otro tipo de intereses y derechos amenazados o quebrantados, que no hacen parte de la consecuencia de la lesión psico-física.

Al respecto la H. Corte Suprema de Justicia, en providencia reciente¹² sostuvo:

//Desde esta perspectiva, y en contraposición al daño estrictamente patrimonial, el perjuicio extrapatrimonial no se reduce al tradicional menoscabo moral, pues dentro del conjunto de bienes e intereses jurídicos no patrimoniales que pueden resultar afectados mediante una conducta dolosa o culposa se encuentran comprendidos aquéllos distintos a la aflicción, el dolor, el sufrimiento o la tristeza que padece la víctima. En este contexto, son especies de perjuicio no patrimonial –además del daño moral– el daño a la salud, a la vida de relación, o a bienes jurídicos de especial protección constitucional tales como la libertad, la dignidad, la honra y el buen nombre, que tienen el rango de derechos humanos fundamentales.

Así fue reconocido por esta Sala en providencia reciente, en la que se dijo que ostentan naturaleza no patrimonial: "...la vida de relación, la integridad sicosomática, los bienes de la personalidad –verbi gratia, integridad física o mental, libertad, nombre, dignidad, intimidad, honor, imagen, reputación, fama, etc.–, o a la esfera sentimental y afectiva..." (Sentencia de casación de 18 de septiembre de 2009) [Se subraya]

Estas subespecies del daño extrapatrimonial no pueden confundirse entre sí, pues cada una de ellas posee su propia fisonomía y peculiaridades que las distinguen de las demás y las hacen merecedoras de tutela jurídica; aunque a menudo suele acontecer que confluyan en un mismo daño por obra de un único hecho lesivo.//

Discurrió la misma Corporación en este sentido:

//De ahí que el daño no patrimonial se puede presentar de varias maneras, a saber: i) mediante la lesión a un sentimiento interior y, por ende, subjetivo (daño moral); ii) como privación objetiva de la facultad de realizar actividades cotidianas tales como practicar deportes, escuchar música, asistir a espectáculos, viajar, leer, departir con los amigos o la familia, disfrutar el paisaje, tener relaciones íntimas, etc., (daño a la vida de relación); o, iii) como vulneración a los derechos humanos fundamentales como el buen nombre, la propia imagen, la libertad, la privacidad y la dignidad, que gozan de especial protección constitucional.

Las dos primeras formas de perjuicio han sido amplia y suficientemente desarrolladas por esta Corte. El menoscabo a los bienes jurídicos personalísimos de relevancia constitucional, en cambio, aunque se ha enunciado tangencialmente por la jurisprudencia, no ha sido materia de profundización, dado que hasta ahora no se había planteado ese asunto en sede de casación.//

Y es que esta nueva concepción, como lo sostiene la alta Corporación de la jurisdicción ordinaria, obedece a que "el constitucionalismo se convirtió de ese modo en el nuevo

¹² CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, M.P. Dr. Ariel Salazar Ramírez, SC10297-2014, radicación: 11001310300320030066001, sentencia del cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014).

paradigma del orden jurídico, cuyo influjo ha repercutido en las demás áreas del derecho positivo, incluido el derecho civil, naturalmente, que además de la función que tradicionalmente ha cumplido como regulador de las relaciones privadas, asume ahora un carácter protector de los derechos inalienables.

(...) La atención debe centrarse, entonces, no en la posibilidad de admitir la indemnización del daño a los bienes personalísimos protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales que reconocen derechos fundamentales, como categoría autónoma perteneciente al género de los perjuicios extrapatrimoniales –pues su existencia hoy en día no se pone en duda–; sino en precisar en qué casos resulta viable su concesión, con el fin de evitar un pago doble o exagerado de una misma consecuencia nociva que tiene su causa adecuada en un único evento.

De manera que, por regla general, el desagravio del perjuicio no patrimonial carece de la virtualidad de producir un enriquecimiento injusto, pues los bienes jurídicos inherentes a la persona humana no tienen equivalencia en dinero. Luego, si la medida de satisfacción que se reconoce no lleva implícito un provecho económico sino más bien de simple consolación, satisfacción o compensación, entonces es desacertado afirmar que la misma puede dar lugar a cualquier tipo de lucro (...).¹³

Así pues en aras de satisfacer cada interés legítimo lesionado con el hecho dañoso, en el caso de autos, tenemos que además de apalear sus derechos fundamentales a la vida, el respeto por la integridad física, se generó el menoscabo de un interés diferente que no es resarcido con el reconocimiento del daño a la salud, pues además de afectarse la integridad física, el menoscabo de otros derechos constitucionales, se han visto sacudidos, como consecuencia de la afectación, así sus actividades cotidianas, deportivas, recreacionales, resultaron frustradas por la incapacidad física arrojada. De tal suerte que el disfrute a plenitud de su vida, la recreación, como un derecho fundamental, se han visto seriamente afectados con la situación ocurrida.

Recordemos que el contenido del artículo 52 constitucional, del derecho al deporte a la recreación y la educación física, plantea en su núcleo esencial la función a nivel individual, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y, a nivel social, el desarrollo social del país a través de su función socializadora, integradora y pacificadora.

¹³ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, M.P. Dr. Ariel Salazar Ramírez, SC10297-2014, radicación: 11001310300320030066001, sentencia del cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014).

La consagración del deporte como derecho tuvo como referente internacional el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consideró al deporte como un derecho social. En 1978, la Carta Internacional de Educación Física y Deporte, adoptada por la UNESCO ratificó en el mundo no sólo la importancia que tiene el deporte, sino también la educación física y la recreación como elementos esenciales dentro del sistema de educación, formación integral de las personas y enriquecimiento de la cultura.

Sin duda alguna la aniquilación de algunas tareas recreacionales para el afectado Fabián Alberto Garay Granada, como el desarrollado de tareas deportivas y/o culturales desencadenaron un desarrollo anormal de su vida que debe ser reparado, por la conculcación de su derecho constitucional a la recreación, al despliegue de actividades lúdicas, de la capacidad para su realización, que como consecuencia del daño sufrido se generaron.

La tasación del presente perjuicio, se estima aproximadamente en doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva, y a favor del lesionado.

3. OTRAS MEDIDAS REPARATORIAS.

La jurisprudencia de la alta corporación de lo contencioso administrativo ha expuesto la necesidad de reparar integralmente a la víctima del daño causado por las entidades públicas, que obedece no sólo a la materialización del principio de "reparación integral" que nuestro ordenamiento ha incorporado, sino en respuesta a la influencia de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias al denominado "Bloque de constitucionalidad" ¹⁴.

Es lógico además entender que en virtud de la figura los jueces están sujetos a tener presente los instrumentos internacionales que se incorporan en nuestro compendio normativo, tal como puede interpretarse del contenido del artículo 93 constitucional. De allí que la jurisprudencia de los intérpretes autorizados de los instrumentos que hacen parte del bloque de constitucionalidad resultan efectivos al momento de interpretar el alcance de los derechos humanos y del propio Derecho internacional humanitario, y las maneras de su reparación. Precisamente el órgano judicial internacional ha trazado parámetros que nos

¹⁴ CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-370 de 2006.

muestra que la reparación a la víctima trasciende más allá de la obligación de dar, de lo pecuniario, para obligar al causante a hacer, como una forma de reparar integralmente el perjuicio causado.

Respecto a la procedencia de éste tipo de medidas correctivas, el H. Consejo de Estado sostuvo:

Como se precisó, el daño antijurídico considerado como lesión de un derecho, bien o interés legítimo supone la alteración o afectación de un estado de cosas que impacta de manera negativa la esfera interna y externa de la persona que lo padece y, por consiguiente, no sólo comprende la órbita patrimonial. Así las cosas, el principal objetivo del derecho de daños consiste en reparar integralmente la afectación padecida por la persona en su vida, integridad o bienes, razón por la que a la hora de valorar la misma es necesario establecer e identificar si es posible que opere la restitutio in integrum y, de ser factible, adoptar las medidas deprecadas en la demanda -o que, dependiendo del caso concreto puedan ser decretadas de oficio por el juez- tendientes a que se restablezca el statu quo o estado de cosas anterior a su producción. Es decir, llevar a la víctima de un daño antijurídico a un estado como si no se hubiera producido, o en otros términos remover los efectos negativos que el mismo desencadena. No obstante, si lo anterior deviene imposible en términos materiales, resulta imprescindible establecer cuál es la magnitud del daño antijurídico y qué medidas de reparación pueden ser decretadas para resarcir las consecuencias de aquél, como por ejemplo la indemnización por equivalente. Así las cosas, la reparación no se asimila a indemnización, ya que esta última constituye uno de los varios componentes que integran a la primera y, por ende, la relación que existe entre uno y otro concepto es de género y especie, motivo por el cual el daño antijurídico desde el paradigma actual de la reparación desborda el que impone el concepto de patrimonio. Los anteriores lineamientos se acompasan con las posturas y tendencias modernas de la responsabilidad que desbordan el concepto de "responsabilidad patrimonial", para adoptar la categoría de "derecho de daños", en el que el eje central lo constituye la persona que padece la afectación y, por consiguiente, la principal función de la responsabilidad en el mundo moderno consiste no tanto en sancionar conductas como en restablecer los derechos, bienes o intereses legítimos que se afectan con la producción de un daño. En ese orden de ideas, la Sala ante la gravedad de los hechos en el caso sub examine, adoptará una serie de medidas y determinaciones que apuntan a reparar de manera integral el daño irrogado a los demandantes, constituido aquél no sólo por los perjuicios materiales e inmateriales que tienen repercusión patrimonial y que fueron determinados en los acápites anteriores, sino, adicionalmente, por las graves y significativas vulneraciones a los derechos humanos -fundamentales- de los demandantes."¹⁵

3.1. Medida de Rehabilitación.

Solicitamos al señor Juez de Conocimiento ordenar a la entidad demandada disponer lo necesario para que por su cuenta se brinde a Fabián Alberto Garay Granada la asistencia clínica, de carácter necesaria para la superación de las secuelas que en éste dejó el suceso.

TERCERO. Que se ordene que el valor de la indemnización se liquide con el ajuste previsto en el artículo 192 inciso 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

¹⁵ Sentencia del catorce (14) de abril de dos mil diez (2010), Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00595-01(18960), C.P. Dr. Enrique Gil Botero, Actor: Rogelio Aguirre López y otros.

CUARTO. Que se ordene cumplir con la sentencia en el término indicado en el artículo 192 inciso 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

H E C H O S

PRIMERO. De la relación marital entre Hernando Garay y Susana Granada se procreó a Olga Beatriz y Ángela María, conformando un hogar destacado por el amor, respeto, y mutua colaboración.

SEGUNDO. Siendo muy joven y fruto de una relación sentimental interrumpida, Olga Beatriz Garay Granada engendró a Jair de Jesús y Fabián Alberto, quienes fueron abandonados por su progenitor.

La juventud de la fémina y su precaria condición económica, desencadenó que sus progenitores debieran asumir solidariamente la crianza y manutención de sus nietos, siempre con el apoyo de Ángela María, quien también colaboró en el rol materno de Olga Beatriz. La sui generis relación generó lazos afectivos muy fuertes entre Jair de Jesús y Fabián con sus abuelos y tía materna.

TERCERO. Unos años después, ya estando en una etapa madura de su vida, Olga Beatriz rehízo su vida sentimental con el señor Ariel Santiago compañero permanente actual de la cual se procreó Rubén Santiago Garay y Álvaro Santiago Garay, núcleo familiar que ha resaltado por el respeto y alto grado de solidaridad.

La precariedad económica del grupo familiar obligó que desde muy jóvenes la descendencia combinara sus faenas académicas con algunas actividades laborales, lo que consolidó un escenario de socorro, ayuda, asistencia, entre todo el conglomerado.

CUARTO. Desde muy joven, Fabián Alberto Garay Granada anheló vincularse a las filas de la Fuerza Pública de Colombia.

QUINTO. Efectivamente en el año dos mil catorce (2014) Garay Granada se incorporó, en cumplimiento de su servicio militar obligatorio; al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, siendo ubicado en el Batallón de Alta Montaña número 10 “MY Oscar Giraldo Restrepo”,

adscrito a la Tercera Brigada, ubicado en las instalaciones del Batallón de Artillería número 3 Batalla de Palace en la municipalidad de Buga.

SEXTO. Para el día nueve (9) del mes de junio del año dos mil quince (2015) el joven Fabián Alberto Garay Granada, estando en labores militares, en el corregimiento de Barragán, jurisdicción del municipio de Tuluá, sufrió serias lesiones en su abdomen, producto de un impacto de un proyectil de arma de fuego.

SÉPTIMO. Según el relato del lesionado, observó, cerca de su área de custodia, dos sujetos con comportamientos extraños, por lo que decidió movilizarse hacia donde se encontraban. Para abordarlos debía pasar una cerca que dividía el terreno. Al momento de sobrepasarla se enreda con la misma lo que produjo su desestabilización y caída, provocando que se accionara involuntariamente el arma de fuego que portaba, avivando un impacto de proyectil sobre su zona abdominal.

OCTAVO. De inmediato fue auxiliado por varios soldados, entre ellos José Varilla Zapata, Luís García Martínez, Cristián Tangarife, Wilson Rivera, José Hernández Santana; quienes lo trasladaron a un centro hospitalario cercano para recibir la atención necesaria.

NOVENO. Por la gravedad y complejidad de la lesión fue ordenada su remisión al Hospital Militar Regional de Occidente, de la ciudad de Santiago de Cali, en donde se ratificó el diagnóstico de trauma abdominal.

Desde aquel momento se iniciaron valoraciones para conocer la intensidad del daño físico, así se le realizaron exámenes clínico para verificar otras afectaciones físicas.

DÉCIMO. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1796 del año 2000, se elaboró el respectivo informe, aunque no se vislumbran las circunstancias de tiempo, modo y lugar del suceso, y simplemente se dejó constancia que el hecho era calificado como contrario a la orden del superior por no respetarse, aparentemente, los protocolos de seguridad.

UNDÉCIMO. Una vez desvinculado del servicio, y de haber retornado a su seno materno, Garay Granada, continuó con la administración de medicamentos, tratamientos, cirugías y terapias, por varios meses.

DUODÉCIMO. Una vez adelantado gran parte del tratamiento médico y clínico, se procedió por parte de la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional a realizarle valoración a fin de determinar su pérdida de capacidad laboral, sin embargo por no existir certeza de la gravedad del daño se dispuso postergar la decisión, tal como consta en acta de junta

médico provisional 82590 del día catorce (14) del mes de octubre del año dos mil quince (2015).

DÉCIMO TERCERO. La incapacidad física, el desgastante e infructuoso camino de la recuperación por casi doce (12) meses, el desespero de su inactividad laboral producto de su condición física, tiene inmerso al lesionado ya a toda a su la núcleo familiar del joven Góngora Anchico e en un profundo estado de tristeza, angustia y desazón.

DÉCIMO CUARTO. El estado emocional de Fabián Alberto Garay Granada, ha sido traumático para todos sus familiares, pues el estado de desasosiego que muestra con frecuencia el afectado los ha llevado a un giro notorio en sus comportamientos sociales y familiares.

DÉCIMO QUINTO. Conforme la carga procesal que impone el inciso segundo del artículo 173 del Código General del Proceso, el reclamante solicitó a las diversas dependencias la información necesaria, y a la que se podía acceder¹⁶; para demostrar los supuestos referidos.

DÉCIMO SEXTO. En cumplimiento de la exigencia del artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, que creó el artículo 42 A de la Ley 270 de 1996; se realizó el día veintisiete (27) del mes de enero del año dos mil dieciséis (2016) la convocatoria de conciliación extrajudicial, la cual se llevó a cabo el día dieciséis (16) del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016), declarándose fallida, como consta en acta que se anexa expedida por la Procuraduría 57 Judicial I para asuntos administrativos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RECLAMACIÓN

Constitución Nacional, artículos 1, 2, 6, 90, 93, 217, 318 y 365.

Artículo 2:

Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado.

En su artículo 90, reza:

¹⁶. Es decir al documento con reserva judicial.

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Convención Americana de Derechos Humanos¹⁷, artículos 1, 11, 22.

Sostiene en su artículo 1,

Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Artículo 4. Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

(...)"

Por su parte en el artículo 5 se destaca el Derecho a la Integridad Personal

"1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral."

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos¹⁸

Ley 1437 de 2011.

La Ley 446 de 1998, artículo 16.

¹⁷ Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.

¹⁸ Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.

FUNDAMENTO DE LA RECLAMACIÓN

1. Fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial de la administración pública.

El artículo 1 de nuestra Carta Política concibe el Estado Social de Derecho como aquel de profundo respeto por la dignidad humana y la solidaridad de las personas con una prevalencia del interés general sobre el particular; norma que debe concordarse con el artículo 2 en su inciso 2 al determinar que *"las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derecho y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares"*.

El artículo 90 de nuestra Constitución Política señala: *"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas"*. La última parte de este inciso hace relación a la causalidad, y de ella depende el examen de la imputación o adjudicación del daño a las autoridades públicas.

Nuestra Constitución Política en el citado artículo 90 nos enseña que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que se ocasionen como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades públicas. Así las cosas, como lo ha distinguido la jurisprudencia y la doctrina, a partir de este texto constitucional el deber resarcitorio o de reparación a cargo del Estado emerge cuando se ha causado un **daño antijurídico** que le sea **imputable**.

Es así como, dentro de este nuevo universo constitucional, la responsabilidad no está únicamente ligada al actuar negligente, culposo o doloso, es decir a criterios subjetivos, desplazándose a criterios objetivos, fundamentados en principios de **justicia, equidad, solidaridad**, etc., en donde la importancia gira alrededor de quien sufre el daño. Es así, como puede hallarse el Estado obligado a resarcir un perjuicio causado a pesar que su actividad o actuación esté dentro de los marcos de la licitud. Esta filosofía jurídica, argumentada desde hace varios años, se alimenta con la esencia del artículo 90 de nuestra Constitución al disponer la responsabilidad estatal por los *daños antijurídicos*.

El daño antijurídico es fuente de responsabilidad estatal y a su vez la teoría de la responsabilidad objetiva adquiere fundamento constitucional, razón por la cual surge la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado como el punto de intersección a través del cual encuadra cualquier régimen de responsabilidad. El concepto de daño

18

antijurídico no ha sido definido en nuestra legislación, pero hace varios años la jurisprudencia colombiana ha venido formando la teoría de la Lesión resarcible fundamentada en el daño antijurídico, basados en la doctrina española, y es así como en distintos fallos emitidos por el Consejo de Estado se encuentra una concepción del daño antijurídico que lo consagra como el fundamento de todo deber y obligación de reparación.

De ahí, que el objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado es el restablecer el equilibrio económico roto cuando se lesiona un patrimonio particular por parte de la administración pública. Se ha pasado de la llamada antijuridicidad subjetiva, que exigía el dolo, la culpa o falta del funcionario de la administración para generar la responsabilidad del Estado, a la llamada antijuridicidad objetiva, **que tiene como fundamento el daño ocasionado a la víctima, que pasa a ser el elemento más importante de la responsabilidad patrimonial estatal.**

2. De los regímenes de responsabilidad aplicables al caso sub júdice.

En reiteradas oportunidades la jurisprudencia del H. Consejo de Estado se ha pronunciado respecto de los eventos en los que procede la reclamación por un daño sufrido por los servidores del orden con ocasión de su función o servicio público.

El historial procesal y probatorio que en éste caso se conoce, permite encausar con muchísima claridad la responsabilidad de la entidad pública convocada bajo la tesis objetiva; según circunstancias que relatáremos a continuación y si se quiere adicionalmente bajo la tesis subjetiva, pues ha concurrido en este hecho una evidente falla en el servicio.

En el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado la jurisprudencia ha aplicado varios títulos jurídicos de imputación con relación a eventos similares. Se ha acudido al de **daño especial** cuando el “perjuicio” tiene su causa en la exposición excepcional de su seguridad personal y por ende habrá un rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas. Sin embargo cuando la causa de los daños se origina en otro tipo de hechos, según estos debe aplicarse el **de falla probada**¹⁹ cuando la irregularidad administrativa produjo el daño.

Así lo explicó el Consejo de Estado en sentencia del veinticinco (25) de febrero de dos mil nueve (2009), ponente Dra. Myriam Guerrero de Escobar, radicación número 18001-23-31-000-

¹⁹ Sección Tercera, sentencias: 10 de agosto de 2000. Exp. 12.648. Actor: Gerardo Patiño, 30 de noviembre de 2000. Exp. 11.182. Actor: Peter del Socorro Vanegas, 4 de abril de 2002. Exp. 13.448. Actor: Edilson Ojeda Gamboa.

1995-05743-01(15793):

La jurisprudencia de la Sala ha precisado en distintas oportunidades el régimen de responsabilidad aplicable a los eventos de daños causados a los soldados que prestan el servicio militar en calidad de conscriptos, es decir, aquellos que son reclutados de manera obligatoria (soldados regulares, bachilleres, campesinos etc.) que se diferencia del régimen jurídico aplicable por los daños causados al personal de la fuerza pública y de los organismos de defensa y seguridad del Estado que ingresan de manera voluntaria (personal de soldados voluntarios y profesionales, suboficiales y oficiales, personal de agentes de la Policía Nacional, detectives del DAS, entre otros)²⁰.

Siguió explicando que la responsabilidad respecto de los conscriptos se debe analizar bajo

el régimen objetivo del daño especial, determinado, por dos situaciones que deben concurrir:²¹ en primer lugar, por el rompimiento del equilibrio de la igualdad frente a las cargas públicas que se genera al ser incorporados, por mandato constitucional²² en los términos²³ y salvo las excepciones consagradas por la Ley, a prestar el servicio militar de manera obligatoria, pese a que no todos los asociados están llamados a soportar tal situación y, en segundo lugar, por las mayores contingencias a las que están sometidos en relación con los demás miembros de la sociedad, por consiguiente, cuando sufren desmedro físico o fallecen por razón del servicio, el Estado asume la obligación de reparar todos los daños antijurídicos que se causen con ocasión del mismo, pues el conscripto sólo está obligado a soportar la restricción relativa de los derechos y libertades que resultan inherentes del ejercicio de la actividad militar. (...).

No obstante, en el caso de los conscriptos, cuando el daño tiene origen en irregularidades en la actividad de la administración, el análisis debe efectuarse a la luz del régimen general de responsabilidad civil extracontractual del Estado -falta en la prestación del servicio- y, en caso de no hallarse estructurada ésta, deberá acudirse a los demás regímenes para efectuar el correspondiente estudio".

2.1. Responsabilidad objetiva del Estado en el caso de los perjuicios causados al miembro de la fuerza pública.

Si bien es cierto todo miembro de las Fuerzas Públicas del orden por el mismo hecho de su responsabilidad, debe asumir las eventuales consecuencias, claramente riesgosas e impredecibles en muchos casos, que para su integridad, su libertad personal y aun su vida comporta la vinculación a las filas, no obstante surgen eventos en que son el producto de situaciones anormales en que son puestos y que, por lo tanto, derivan una responsabilidad patrimonial de la institución que lo causa.

Como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Alta Corporación Constitucional la formación del militar es un adiestramiento permanente dirigido a un objetivo específico: saber afrontar las situaciones de peligro. Ahora bien, es de suponer que quien se ejercita en una actividad

²⁰ Entre otras, Sentencia proferida dentro del radicado 12.799.

²¹ Sentencia proferida el 23d e abril de 2008 Exp. 15720.

²² Artículo 216 de la Constitución Política.

²³ Artículo 3º de la Ley 48 de 1993.

desarrolla destrezas que se incorporan al repertorio de sus acciones y reacciones cotidianas, que vistas desde afuera pueden parecer excepcionales y extraordinarias pero que para él deben aparecer como normales. Por tanto, en ese campo específico la exigencia que para otro podría ser desmesurada, para él es razonable: afrontar un combate, no huir, no hacer manifestaciones de pánico. La valentía, entonces, así entendida, y vinculada al honor militar, se revela como una destreza exigible de quien se ha preparado para adquirirla, y el no poseerla sería vergonzoso. No es descartar, en ninguno de los dos casos, que circunstancias particulares, específicas, personales o externas, frustren la observancia de la conducta exigible, pero se trata entonces de casos "anormales" que merecen una consideración especial que también el ordenamiento normativo debe tomar en cuenta²⁴.

Lo que vale resaltar en este evento, es que la lesión de Garay Granada es el resultado de una anomalía ocurrida en el servicio; la responsabilidad de la institución surge del mismo momento en que se ha puesto al servidor público a asumir una carga y un riesgo mucho más relevante de lo normal, es decir de lo que corrientemente asume todo individuo, propiciado por el cumplimiento del deber constitucional y legal de defender el territorio y bienes de la Nación.

La jurisdicción contencioso administrativa ha venido sosteniendo entonces que si ese militante es puesto circunstancias extraordinarias, de hecho en condiciones más riesgosas de lo que normalmente se afronta al vincularse a las filas de las Fuerzas del orden; cualquier evento dañoso que se derive de esa anomalía de condiciones, hace responsable patrimonialmente a la institución de los consecuentes perjuicios.

Así lo expuso:

Dado que la muerte de los agentes se produjo en actos de servicio, para establecer la responsabilidad del Estado, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección, quienes ejercen funciones relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía o detectives del DAS, asumen los riesgos inherentes a la misma actividad y están cubiertos por el sistema de la indemnización predeterminada o automática (a forfait), establecida en las normas laborales para los accidentes de trabajo.

*No obstante, habrá lugar a la reparación plena o integral de los perjuicios causados, cuando dicho daño se haya producido por falla del servicio²⁵, o cuando **se someta al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros, porque en tales eventos se vulnera el principio de igualdad frente a las cargas públicas**²⁶ (destacado es propio).*

Aplicando estos criterios jurisprudencias, en sentencia de la Sala del 20 de septiembre de 2001, expediente No. 5001-23-31-000-1994-4398-01 (13553), se condenó al Estado por la muerte de un agente de la Policía, ocurrida a manos de un grupo subversivo, por considerar que en ese evento se incurrió en falla del servicio, ya que a pesar de que se tenía conocimiento de la inminencia del

²⁴ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-563 del 30 de noviembre de 1995. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.

²⁵ Sobre el particular ver, entre otras, la sentencia del 13 de diciembre de 1993, expediente No. 10.807.

²⁶ Al respecto, ver entre otras, sentencia del 3 de abril de 1997, expediente No. 11.187.

ataque, no se implementaron las medidas necesarias para afrontarlo y por consiguiente, para garantizar a los miembros de la institución contra los cuales se dirigió, estrategias de defensa real:

"Concluye esta Sala, entonces, que la muerte del agente Luis Alfonso Gutiérrez Pinilla resulta imputable a la Nación. En efecto, no obstante que altos mandos de la Policía Nacional tenían conocimiento de la inminencia de un ataque guerrillero a la Subestación de El Calvario, a la cual se encontraba adscrito dicho agente, aquéllos no tomaron medida alguna para garantizar que los miembros de la institución estuvieran preparados para afrontarlo; así, por ejemplo, no reemplazaron el armamento, ni los equipos de comunicaciones -a pesar de haber advertido que era necesario-, y no aumentaron el pie de fuerza, ni diseñaron mecanismos especiales para enviar refuerzos, en caso de urgencia. No puede la Sala establecer cuál era el plan específico o la estrategia que debía ejecutar la institución mencionada; es ella la que, en cada situación y con fundamento en labores de inteligencia, debe adoptar la decisión más adecuada; sin embargo, es claro que, en el caso objeto del presente proceso, su actitud fue omisiva, puesto que era evidente que la Subestación de El Calvario podía ser objeto de un ataque guerrillero en cualquier momento y, en las condiciones en que se encontraba, no estaba preparada para afrontarlo, y, por lo tanto, que el comandante y los agentes a ella adscritos tendrían una alta probabilidad de resultar muertos o gravemente lesionados, sin que, por lo demás, su valerosa actuación sirviera, finalmente, para proteger a los habitantes del municipio. En estas condiciones, el hecho de las FARC no era imprevisible para la entidad demandada.

Así las cosas, es claro que Luis Alfonso Gutiérrez Pinilla, en su condición de agente asignado a la subestación mencionada, fue sometido a un riesgo excesivo e innecesario, por causa de una falla en la prestación del servicio de Policía. Si bien los miembros de la Fuerza Pública deben soportar el riesgo de sufrir daños como consecuencia del ejercicio de sus funciones, el cual, por la naturaleza de éstas, asumen al aceptar sus cargos, y al ocurrir, no da lugar al surgimiento de la responsabilidad del Estado -pues, por lo general, se configura una de las causales de exoneración, normalmente hecho de tercero o fuerza mayor-, debe precisarse que ello no autoriza a éste último para abandonarlos a su suerte, imponiéndoles cargas imposibles de cumplir; por el contrario, es su deber dotarlos de los elementos necesarios para permitir el cabal cumplimiento de sus obligaciones, con mayor razón en los casos en que es previsible un enfrentamiento armado, y poner en práctica planes y estrategias tendientes a la adopción oportuna de medidas preventivas, para garantizar el éxito de las operaciones y proteger la integridad de los combatientes legítimos.

Al resolver una situación similar, expuso esta Sala los siguientes argumentos, que resultan pertinentes en el presente caso:

"...recuerda la Sala que la administración para exigirle resultados a los miembros de la fuerza pública en la prevención y represión del delito, debe dotarlos no solamente de los medios idóneos sino además ofrecerles riguroso entrenamiento y formación académica para el manejo apropiado de los elementos de dotación oficial, aprovechando al máximo los recursos económicos que para tal fin se destinen. Por demás, se advierte a que a los uniformados no se les puede someter de buenas a primeras a contingencias que desborden los riesgos que normalmente tienen que asumir en la defensa de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, menos cuando los agentes carecen de los instrumentos idóneos para cumplir cabalmente con los impuestos por la Constitución.

En el sub-lite no puede admitirse que la incursión guerrillera en la estación... constituya fuerza mayor, pues era de conocimiento público que en el territorio... operaban diferentes frentes de la Coordinadora Guerrillera, los cuales tenían como objetivo militar los cuarteles de la fuerza pública..., que hacía previsible un ataque de la subversión... El accionar de la subversión no reviste la condición de irresistible por el número de guerrilleros que perpetraron la actividad delincuenciales (más de 200), pues siendo un hecho previsible la misma autoridad no proporcionó a tiempo el armamento necesario, ni asignó suficientes uniformados para vigilar la estación...

...

La Sala desea aprovechar la oportunidad para indicar que al igual que a los asociados, a los miembros de la fuerza pública también les asiste el derecho de reclamar con fundamento en la Constitución Nacional que se protejan y respeten sus derechos humanos, cuando resulten vulnerados por un trato degradante o indigno bien que la acción se derive por la conducta de sus superiores, de los particulares que desempeñen funciones públicas, de la comunidad en general e incluso de quienes actúan al margen de la ley.

Los principios jurídicos, morales y éticos sobre los cuales se cimienta la educación y formación tanto de los soldados como de los agentes de la Policía Nacional y de sus superiores, no solo deben tener aplicación hacia el exterior, sino... al interior de la institución, en cuya tarea ha de prodigar a sus servidores trato digno, de modo que no exponga ni lesione injustamente su integridad física y moral.

Si bien a los uniformados por naturaleza se les exige... una exposición excepcional de su seguridad personal dadas sus funciones constitucionales, tal situación no habilita a los superiores a que impongan a los miembros de la fuerza pública cargas adicionales distintas de los riesgos que normalmente deben afrontar en el control o restablecimiento del orden público, pues se iría en

contravía de tales principios colocando no solo en juego el respeto de los derechos humanos sino de paso la vida e integridad física de los agentes, los cuales por esa mera condición no significa que deban asumir a toda costa los riesgos derivados de la falta o falla del servicio imputable a la administración, pues la actividad profesional de agente de la policía o de militar reviste contornos especiales que tampoco deben sobreponerse a lo imposible".²⁷

Si bien los agentes de la Policía asumen los riesgos inherentes a su actividad y por lo tanto, deben soportar los daños que sufran como consecuencia del desarrollo de dicha actividad, su decisión tiene límites que no pueden llegar hasta el extremo de exigirles que asuman un comportamiento heroico, cuando de manera desproporcionada e irrazonable se los somete sin ninguna ayuda real a confrontar una situación de peligro que conducirá inexorablemente a lesionar su integridad física o la pérdida de su vida, como ocurrió en el caso concreto" (destacado es nuestro) ²⁸

En los casos en el que un miembro de la Fuerza Pública sufre un daño en ejercicio de sus funciones, la jurisdicción administrativa ha expresado que quienes ejercen labores de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía, deben soportar los daños causados como consecuencia de los riesgos inherentes a la misma actividad y sólo habrá lugar a la reparación cuando dicho daño se haya producido por falla del servicio, o **cuando se someta al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros**, como en el evento que ocupa la atención, pues el joven Fabián Alberto Garay Granada, fue expuesto a un inesperado e increíble suceso.

Así las cosas, conociendo que el joven Fabián Alberto Garay Granada resultó lesionado por efecto de las actividades logísticas y militares propias de la institución convocada deberá asumir la responsabilidad del daño sufrido por los reclamantes.

En varias oportunidades el Honorable Consejo de Estado ha manifestado que cuando una persona ingresa al servicio militar obligatorio en buenas condiciones de salud debe dejar el servicio en condiciones similares²⁹, con ese criterio el alto tribunal estableció a cargo del Estado una obligación de reparación por todos los daños cuya causa esté relacionada con la prestación del servicio militar obligatorio y excedan la restricción de los derechos y libertades inherentes a la condición militar.

Con relación a las personas que se encuentran en situación de sujeción especial como los reclusos y los conscriptos el deber de protección del Estado es mayor, para ser más preciso su obligación se torna de resultado, lo cual significa que si no se devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que se encontraba antes de su reclutamiento o retención, debe responder patrimonialmente por los perjuicios que éste haya sufrido durante el tiempo en el cual fue sometido a la prestación del servicio militar, aunque haya puesto en funcionamiento

²⁷ Sentencia del 7 de septiembre de 1998, expediente 10.921.

²⁸ Sentencia Consejo de Estado, C.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque del veinte (20) de febrero del año dos mil tres (2003).

²⁹ Sentencia 3 de marzo de 1989, expediente 5290.

todo los medios de los que dispone para proteger el retenido y evitarle la causación del daño.

Ha señalado el alto Tribunal:

Ahora bien, es deber del Estado que se beneficia con la prestación de ese servicio, ofrecer al conscripto las medidas de protección que se requieran para reintegrarlo a su familia en las mismas condiciones en que ingresó y por ello debe brindarle no sólo la preparación y adiestramiento en el aspecto militar y de defensa personal que precisa para en frenar lo peligros que comporta el ejercicio de su actividad, sino también la atención médica y psicológica que requiera. por eso e ha dicho que frente a quien se halla en una situación de especial sujeción como la de los conscriptos, el Estado tiene dos tipos de obligaciones: a) de hacer, esto es, de prever y controlar los peligros que pueda sufrir la persona desde el momento en que se recluta hasta el momento en que es devuelta a la sociedad y b) de no hacer, referida a la abstención de cualquier conducta que pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no estén limitados por su especial situación...³⁰

Conclusión.

Estas consideraciones nos llevan a concluir, por las circunstancias especiales en que sucedieron los lamentables hechos, que debe predicarse la obligatoriedad de resarcir los daños ocasionados por la institución pública.

RELACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

I. MEDIOS DE PRUEBA APORTADOS.

Solicitamos al H. Juez de Conocimiento, se tengan como medios de prueba los siguientes documentos aportados con la demanda:

1. Poder debidamente otorgado por los demandantes.
2. Fotocopia de los documentos de identidad de los demandantes.
3. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Fabián Alberto Garay Granada.
4. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Jair de Jesús Garay Granada.
5. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Álvaro Daniel Santiago Garay
6. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Rubén Darío Santiago Garay.

³⁰ Sentencia de mayo 24 de 2001. Expediente 13.389. C.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque.

7. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Olga Beatriz Garay Granada.
8. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Ángela María Garay Granada.
9. Fotocopia de la petición remitida por Fabián Alberto Garay al Comandante del Batallón de Alta Montaña No. 10 "Mayor Oscar Giraldo Restrepo", con su debida constancia de entrega.
10. Comunicado 0451 MDN-CGFM-CE-DIV3-BR-3-BAMOG10-EJE.CJM.30.10 del día diez (10) del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016), firmado por el Comandante de Batallón de Alta Montaña No. 10 "Mayor Oscar Giraldo Restrepo", dirigido a Fabián Alberto Garay.
11. Fotocopia de la petición remitida por Fabián Alberto Garay al Jefe de Personal del Batallón de Alta Montaña No. 10 "Mayor Oscar Giraldo Restrepo", con su debida constancia de entrega.
12. Fotocopia de la certificación expedida por el Sargento Viceprimero Zuleta Pérez Edir en su calidad de Suboficial de Recursos Humanos del Batallón de Alta Montaña No. 10 "MY. Oscar Giraldo Restrepo".
13. Fotocopia de la petición remitida por Fabián Alberto Garay al Director del Hospital Militar Regional de Occidente, con su debida constancia de entrega.
14. Comunicado 005020 MDN-BR3-BASPC3- HOMRO-DIR-GESCAL-SIAU 29.1 del día veinticuatro (24) del mes de diciembre del año dos mil quince (2015), firmado por el Director del Hospital Militar Regional de Occidente, dirigido a Fabián Alberto Garay.
15. Fotocopia de la historia clínica expedida por el Hospital Militar Regional de Occidente, de la ciudad de Santiago de Cali, perteneciente al joven Fabián Alberto Garay Granada.
16. Fotocopia de la petición remitida por Henry Bryon Ibáñez al Director del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E., con su debida constancia de entrega.
17. Fotocopia de la historia clínica expedida por el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. de la ciudad de Santiago de Cali.
18. Fotocopia de la petición remitida por Henry Bryon Ibáñez a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, con su debida constancia de entrega.
19. Fotocopia del Acta de Junta Médico Provisional No. 82590 de la Dirección de Sanidad Ejército Nacional, el día catorce (14) del mes de octubre de dos mil quince (2015).
20. Acta de audiencia de conciliación elaborada por la Procuraduría 57 Judicial I para asuntos administrativos.

21. Certificación expedida por la Procuraduría 57 Judicial I para asuntos administrativos.

II. MEDIOS DE PRUEBA A PEDIR SEAN DECRETADAS POR EL DESPACHO

2.1. DOCUMENTALES.

Solicitamos al H. Juez de Conocimiento se sirva oficiar a las siguientes entidades, a fin de determinar lo expuesto en los supuestos CUARTO al DUODÉCIMO del acápite HECHOS de este escrito demandatorio:

Instamos al señor Juez de Conocimiento acceder al petitorio del citado recaudo documental, pues previamente se intentó su obtención por peticiones, tal como lo indica el artículo 173 del Código General del Proceso³¹, exceptuando los documentos que ostentan reserva, según las previsiones de ley³².

2.1.1. Al señor Comandante del Batallón de Alta Montaña No. 10 "Mayor Oscar Giraldo Restrepo"; ubicado en Guadalajara de Buga Km 1 vía La Habana; para que se sirvan remitir a este proceso:

- a. Certificación en la que se indique el tiempo de vinculación a la institución del joven Fabián Alberto Garay Granada identificado con la cédula de ciudadanía número 1.006.317.528 de Bolívar (V).
- b. Fotocopia auténtica de la totalidad de los documentos que componen la hoja de vida del joven Fabián Alberto Garay Granada identificado con la cédula de ciudadanía número 1.006.317.528 de Bolívar (V), que incluya los exámenes de ingreso y egreso a la entidad o a las bases militares a las que estuvo adscrito.

³¹ "...El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que se deberá acreditar sumariamente".

³² Ley 1755 de 2015, ley 1407 de 2010, ley 1015 de 2006, ley 190 de 1995 artículo 33, ley 906 de 2004 artículos 11, 18, 138, 140; ley 938 de 2004.

- c. Certificación en la que se indique si se inició una investigación disciplinaria con ocasión de las lesiones que sufrió Fabián Alberto Garay Granada identificado con la cédula de ciudadanía número 1.006.317.528 de Bolívar, en junio del año dos mil quince (2015), durante la prestación del servicio militar obligatorio.

En caso afirmativo remitirá fotocopia auténtica del trámite surtido.

Se le advertirá al funcionario que si por si razones de competencia corresponde a otra dependencia o institución el diligenciamiento de la comunicación, deberá remitirla de inmediato.

- 2.1.2. A la Dirección General de Sanidad Militar del Ejército Nacional, ubicado en la carrera 7 No. 52-48 - Bogotá, para que se sirva remitir con destino a este proceso fotocopia auténtica de las actas de Junta Médica Laboral practicadas al joven Fabián Alberto Garay Granada identificado con la cédula de ciudadanía número 1.006.317.258 de Bolívar (V), con ocasión de la lesión sufrida en junio del año dos mil quince (2015).

Se le advertirá al funcionario que si por si razones de competencia corresponde a otra dependencia o institución el diligenciamiento de la comunicación, deberá remitirla de inmediato.

- 2.1.3. Al señor Director del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E., ubicado en la calle 5 No. 36-08 Santiago de Cali, para que se sirva remitir con destino a este proceso fotocopia auténtica de la historia clínica perteneciente al señor Fabián Alberto Garay Granada identificado con la cédula de ciudadanía número 1.006.317.258 de Bolívar (v), quien fuera atendido en dicha dependencia desde el día diez (10) del mes de junio del año dos mil quince (2015).

Se le advertirá al funcionario que si por si razones de competencia corresponde a otra dependencia o institución el diligenciamiento de la comunicación, deberá remitirla de inmediato.

- 2.1.4. Al señor Director del Hospital Militar Regional de Occidente, Sanidad Militar, ubicado en la calle 5 No. 83-00 Santiago de Cali, para que se sirva remitir con destino a este proceso fotocopia auténtica de la historia clínica que se tenga con ocasión de la

27

atención brindada al joven Fabián Alberto Garay Granada, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.006.317.258 de Bolívar (V), desde el mes de octubre del año dos mil quince (2015)

Se le advertirá al funcionario que si por si razones de competencia corresponde a otra dependencia o institución el diligenciamiento de la comunicación, deberá remitirla de inmediato.

2.2. TESTIMONIALES

2.2.1. Solicitamos al señor H. Juez de Conocimiento se sirva citar y escuchar en declaración a las siguientes personas, quienes depondrán sobre las relaciones afectivas de Fabián Alberto Garay Granada con los demás demandantes, en especial sobre los supuestos fácticos PRIMERO al CUARTO, DÉCIMO TERCERO y DÉCIMO CUARTO del acápite HECHOS de la reclamación, así como absolverán otros interrogantes que surjan en el momento de la diligencia.

- REINEL SALCEDO RAMOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.146.265 de Bolívar (V).
- MARÍA NIDIA LEÓN MONROY, portadora de la cédula de ciudadanía No. 66.724.959 de Roldanillo (V).
- JOSÉ ALBEIRO LINARES RODRÍGUEZ, titular de la cédula de ciudadanía No. 16.551.274 de Bolívar (V).
- ARIEL SANTIAGO RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.146.248 de Bolívar (V)

Los anteriores se podrán citar en la carrera 2 No. 19-37 - Tuluá.

Atendiendo el domicilio de los citados deponentes, pedimos respetuosamente al despacho de conocimiento ordene a la autoridad judicial que corresponda disponga de los medios tecnológicos que faciliten la práctica de la prueba, tal como lo indica el artículo 37 del Código General del Proceso, o en su defecto ordenará comisionar al señor Juez Civil Municipal – Reparto – de Zarzal, para el desarrollo de las respectivas diligencias, según los voces del artículo 171 id.

2.2.2. Solicitamos al H. Juez de Conocimiento se sirva hacer comparecer a las siguientes personas, quienes depondrán sobre los circunstancias de tiempo, modo y lugar en que resultó lesionado Fabián Alberto Garay Granada, en especial los supuestos fácticos SEXTO al OCTAVO del acápite HECHOS de la reclamación, así como absolverán otros interrogantes que surjan en el momento de la diligencia:

- Dragoneante LUÍS GARCÍA MARTINEZ.
- Soldado regular JOSÉ VARILLA ZAPATA.
- Soldado regular CRISTIAN TANGARIFE MORALES.
- Soldado regular WILMER SALDARRIAGA ESCOBAR.
- Soldado regular WILSON RIVERA DÍAZ.
- Soldado regular JOSÉ DARLIN HERNÁNDEZ SANTANA.

Los citados podrán ser ubicados a través del Comando del Batallón de Alta Montaña No. 10 "Mayor Oscar Giraldo Restrepo, en Guadalajara de Buga Km 1 Vía La Habana.

3.1. PRUEBA PERICIAL.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 el artículo 212 de la ley 1437 de 2011³³, solicitamos al H. Juez de Conocimiento que una vez allegadas las historias clínicas requeridas se sirva ordenar la siguiente pericia, encaminada a demostrar el daño alegado, en especial sobre el supuesto DUODÉCIMO del acápite HECHOS de este escrito demandatorio:

3.1.1. Remitir al joven Fabián Alberto Garay Granada, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.006.317.258 de Bolívar (V), al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santiago de Cali; ubicado en la calle 4 B No. 36-01; para que le sea practicado un reconocimiento médico y se sirvan determinar el tiempo de incapacidad y las secuelas físicas y/o sicológicas a que hubiera lugar, aclarando si son de carácter permanente o transitorias, como consecuencia de las lesiones sufridas, derivadas de un evento ocurrido en el mes de junio del año dos mil quince (2015).

³³ Las **partes podrán presentar** los **dictámenes periciales** necesarios para probar su derecho, o **podrán solicitar la designación de perito**, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas. (Resaltado fuera de texto).

3.1.2. Remitir al joven Fabián Alberto Garay Granada, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.006.317.258 de Bolívar (V) a la Junta Regional de Calificación de Invalidez – Ministerio de Protección Social del Valle del Cauca, ubicada en la Calle 5 E No. 42A 05 – Santiago de Cali, para que le sea practicado un reconocimiento y se sirvan determinar la pérdida de su capacidad laboral como consecuencia de las lesiones físicas y perturbaciones psicológicas/psiquiátricas derivadas de un evento ocurrido en el mes de junio del año dos mil quince (2015).

C U A N T Í A

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 157 de la ley 1437 de 2011, que indica que la cuantía se determinará, tratándose de varias pretensiones, por el valor de la pretensión mayor, nos permitimos estimar razonadamente la cuantía en la suma de ciento cincuenta millones de pesos (\$150.000.000.00) m/cte., correspondientes al "perjuicio material", en la modalidad de lucro cesante futuro³⁴ a favor del reclamante Fabián Alberto Garay Granada.

La anterior cuantía deberá tomarse en consideración para todos los efectos legales.

C O M P E T E N C I A

De conformidad con la cuantía establecida, por el domicilio o sede principal de la entidad demandada, lo es competente el Juzgado Administrativo del Circuito de Buga, como lo indica el numeral 6 de los artículos 152 y 156 de la ley 1437 de 2011.

³⁴ Conforme posición del Consejo de Estado en auto interlocutorio del día diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), al darle un entendido al artículo 157 de la ley 1437, **se debe desechar, a efectos de estimar la cuantía, los pedimentos por concepto de perjuicios inmateriales, esto es, perjuicios morales, por violación de derechos humanos, daño fisiológico, daño a la vida de relación y alteración a las condiciones, por lo tanto la base objetiva para determinar la cuantía del asunto está dada por los perjuicios materiales. Discurrió la Corporación: "La Sala debe interpretar el artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, que se encarga de reseñar las reglas que se deben observar a fin de estimar la cuantía cuando sea este el criterio preponderante a la hora de identificar el Juez competente, (...) Según esta disposición la competencia por razón de la cuantía se determina en primer lugar i) por el valor de la multa o de los perjuicios causados. Entiéndase que en la determinación de tal monto el accionante sólo debe considerar aquellos que sean de orden material, pues los demás, cobijados dentro de la categoría de los perjuicios inmateriales, deben ser excluidos de tal raciocinio. Lo anterior, en tanto que la disposición indica: "sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales". Para llegar a esta conclusión, la Sala precisa que la calificación que hizo el legislador, de excluir los perjuicios morales, se debe interpretar en un sentido extensivo, lo que supone no solo atenerse a lo expresado por dicho rubro en específico sino que cobija también todos aquellos perjuicios que han sido considerados como pertenecientes a la categoría de los inmateriales, pues la finalidad de tal disposición ha sido la de dar relevancia a los perjuicios materiales por ser estos un referente objetivo y preciso de fácil comprobación prima facie". (Énfasis nuestro) Sección Tercera, Subsección C, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación número: 11001-03-26-000-2012-00078-00(45679), actor: José Álvaro Torres y otros, demandado: Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.**

MEDIO DE CONTROL A EJERCER

El medio de control incoado en esta demanda es la de Reparación Directa de conformidad con el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011.

OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL

Con fundamento en el artículo 164 numeral 2 literal i de la ley 1437 de 2011, nos encontramos dentro del término para instaurar la demanda de Reparación Directa.

ANEXOS DE LA DEMANDA

Me permito aportar con el libelo de la demanda:

- Los documentos señalados en el acápite de RELACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA.
- CD contentivo de la demanda.
- Fotocopias de la demanda para el traslado de la entidad demandada,
- Fotocopia de la demanda para el traslado de del Ministerio Público.
- Fotocopia de la demanda para el traslado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- Fotocopia de la demanda para el archivo del despacho judicial.

NOTIFICACIONES

A los suscritos apoderados

Edificio Banco Tequendama ubicado en la calle 11 No. 6 – 40 Oficina 504 - Santiago de Cali,

Teléfono 888 2767, celulares 310 377 1203, 312 2597803,

Correos electrónicos: feyego@yahoo.com,
fernandoyepesgomez@consorciojuridicodeloccidente.com

Los demandantes

Por intermedio de los suscritos apoderados.

La entidad demandada

Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por conducto del señor Ministro de Defensa Dr. Luís Carlos Villegas, funcionario con sede en Bogotá o por intermedio del señor Comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, ubicado en la calle 5 No. 83 - 00 – Santiago de Cali – Valle del Cauca, o por el correo electrónico: notificaciones.cali@mindefensa.gov.co

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

En la carrera 7 No. 75 -66 Centro Empresarial C 75 - Bogotá, teléfono 031-2558955, o por el correo electrónico: procesos@defensajuridica.gov.co, página web: www.defensajuridica.gov.co

Con formato: Sangría: Izquierda: 1,25 cm

Del Honorable Juez,

HENRY BRYON IBÁÑEZ

C.C. No. 16.588.459 de Cali

T.P. No. 68.873 del Consejo Superior de la Judicatura

FERNANDO YEPES GÓMEZ

C.C. No. 94.417.378 de Cali

T.P. No. 102.358 del Consejo Superior de la Judicatura